

17. INTRODUCCIÓN. EL ANÁLISIS DE LOS CONFLICTOS LATINOAMERICANOS: ENTRE LOS DESTELLOS Y ESPEJISMOS DEL HORIZONTE DEMOCRÁTICO.

NICOLÁS ROJAS PEDEMONTE. Universidad de Barcelona, ICCS.

No resulta fácil brindar un panorama general sobre el acontecer político en una región tan variopinta como América Latina. La proximidad idiomática y la trayectoria independentista compartida entre las sociedades latinoamericanas (convergencias sin parangón en otros continentes), contrastan con la dificultad histórica para alcanzar una real integración económica e institucional en la región. La gran distancia entre los países no sólo es geográfica, pues entre ellos se presentarían modelos de desarrollo muy disímiles, con amplia variación entre sus niveles de inserción en los mercados globales y de participación del Estado en la economía. Así, también sociedades con experiencias democráticas de avanzada -en muchos aspectos, ejemplares a nivel mundial- como Uruguay o Brasil, o sociedades con una densa institucionalidad como Chile, distarían ostensiblemente de aquellas con profundos déficits institucionales, como, por ejemplo, México y Argentina. Diversos estudios y *rankings* (IDD-LAT 2011, IDH 2011, Latinobarómetro 2011, entre otros) dan cuenta de amplias diferencias entre las sociedades latinoamericanas, refutándose el mito de la homogénea precariedad material, institucional y cultural de la región. En cada país, así mismo, la articulación entre el Estado y la sociedad civil presenta particularidades históricas de suma relevancia para explicar el conflicto político desatado en los últimos años. En consecuencia, esta Sección 4 del Anuario acentúa el análisis particular de algunos de los principales procesos de movilización durante el año 2011, sin perder de vista, no obstante, que existirían además importantes aspectos comunes y transversales que invitan a desarrollar estudios comparativos.

El desarrollo de la relación entre el Estado y la sociedad civil en cada país sería una pista fundamental para entender los conflictos recientes. Identificar si el fortalecimiento de cada sociedad civil es un proceso autónomo o si se deriva de la injerencia de agentes externos, como organismos internacionales o desde el mismo Estado, es una importante clave explicativa. Si los gobiernos resultan del triunfo electoral de una sociedad civil autónoma

ampliamente movilizada o si, por el contrario, son los gobiernos -o los organismos internacionales- los que impulsan el fortalecimiento de una sociedad civil con altos niveles de dependencia, darían lugar a oportunidades políticas para la movilización significativamente distintas. La relación entre la sociedad civil y el Estado ayudaría a entender por qué determinados movimientos sociales que se han proyectado electoralmente, alcanzando el poder y en algunos casos refundando institucionalmente el orden político (mediante asambleas constituyentes, por ejemplo), tenderían en los primeros años de gobierno a la desmovilización y posteriormente se debatirían entre la condescendencia pasiva y la crítica activa de *su* gobierno en curso. En esta línea, el artículo de Massimo Modonesi [ítem 19] sitúa el conflicto social latinoamericano, reconociendo los desfases y las particularidades de cada caso, a la luz de las tensiones posteriores a los cambios sociales desatados por la consolidación de gobiernos “progresistas” de la ola electoral 2005-2006. Con la estabilización y consolidación institucional de estos gobiernos, según este autor, se evidenciaría en los últimos años una predecible desmovilización, pero paradójicamente se estaría desencadenando una contratendencia de re-movilización. El 2011 ha dado cuenta de un aumento de la autonomía y la crítica de la sociedad civil frente al Estado, como describe el artículo de Quiroz y Sandoval sobre la contienda del TIPNIS en Bolivia [ítem 23]. No obstante, siguiendo a Modonesi, este proceso de reactivación a nivel regional sería incipiente y no daría las luces necesarias para aventurar taxativamente su preeminencia frente a la desmovilización. Estas dos caras del fenómeno permitirían definir al 2011 únicamente como un año de transición y aumento de la incertidumbre en el conflicto social latinoamericano.

No obstante las particularidades de cada sociedad, los diversos conflictos del 2011 revelan la conformación de una férrea resistencia ciudadana frente a las *inclemencias* del mercado y cierta debilidad de las instituciones como *sportes*. Si bien las cifras macroeconómicas indican que el *crecimiento* de la región se ha traducido en cierta mejora de la situación económica de la población, el conflicto social desatado sería su contracara. El fin de las políticas contracíclicas implementadas entre 2007 y 2009 y la profunda desigualdad en la distribución de los impactos (beneficios y perjuicios) del mercado han

erosionado profundamente la legitimidad del modelo (Latinobarómetro 2011). En definitiva, se podría sostener que las demandas sociales apuntan a las arbitrariedades del mercado y a la complicidad de un Estado que no garantiza derechos fundamentales a la población.

Los latinoamericanos participan vertiginosamente en sociedades de mercado desprovistos de una cabal ciudadanía (*citizenship*), carentes, por ejemplo, de garantías básicas como la seguridad (México y Colombia) o la educación superior (Chile). Mientras, por ejemplo, la movilidad social se esgrime como principio consustancial a la economía de mercado, el acceso universal e igualitario a la educación se encuentra obstaculizado institucionalmente en Chile. Como lo expone con claridad Vera en su artículo [ítem 21], la lucha de los estudiantes chilenos apuntaría a la sustitución de una institucionalidad heredada de la dictadura, que hasta la actualidad somete la educación pública a las arbitrariedades del mercado. Así mismo, aun cuando la economía de mercado enarbola la libertad como principio supremo, en sociedades como la mexicana y la colombiana, el Estado no garantizaría básicamente la seguridad ciudadana. E incluso, como señala López Pacheco en su artículo sobre el movimiento de Derechos Humanos en Colombia [ítem 22] y Rovira en su artículo sobre México [ítem 20], el Estado mismo puede llegar a ser la fuente de la violencia. Por cierto, la desprotección y el agravio no se reducen a la población, sino también tiene su correlato en la expoliación y depredación del medio ambiente.

Hace décadas que las demandas sociales en América Latina trascienden el eje de lo *material* y lo *posmaterial*. Sin necesidad de haber alcanzado un determinado nivel de satisfacción de las necesidades materiales, las luchas por la participación en la toma de decisiones, la protección del medio ambiente o la libertad de expresión han sido demandas recurrentes en la región, y en la actualidad éstas se han fortalecido. Si bien el conflicto capital-trabajo no resulta anacrónico e incluso los sindicatos muestran avances en su autonomía reivindicativa, el conflicto eco-territorial se consolida como la principal fuente constitutiva de la acción colectiva en la región. Tanto el panorama general que presenta Modonesi, como los artículos de Quiroz y Sandoval sobre Bolivia y el

de Rovira sobre México, destacan el componente socioambiental en la lucha indígena-campesina contra la expansión del capital transnacional en el continente. Sin duda, la preocupación por el medio ambiente no se limita a los indígenas y campesinos, pues su resonancia se expande significativamente (Latinobarómetro 2011) incluso en aquellas poblaciones no afectadas directamente en su propio hábitat, como lo evidenciaron las masivas movilizaciones en Santiago de Chile en contra del proyecto hidroeléctrico de la transnacional Endesa en la Patagonia, *HidroAysén*.

Transversalmente, las demandas en América Latina apuntan a la reconfiguración de las relaciones entre el Estado y la sociedad. En última instancia, frente a la inclemente liberalización económica de las últimas tres décadas, se demanda una nueva institucionalidad que controle las arbitrariedades del mercado y salvaguarde a los ciudadanos. Por un lado, se está en presencia de una crítica al modelo económico y, por otro, de una demanda por instituciones que hagan frente a los embates del capital. Por cierto, las demandas apelan a la puesta en marcha de importantes transformaciones institucionales; sin embargo, vale preguntarse si acaso es el supuesto déficit democrático lo que gatilla las movilizaciones o más específicamente la ausencia de una determinada institucionalidad *protectora*. Desde todas las perspectivas, las demandas aluden a un cambio de las reglas del juego. No obstante, mientras actualmente el paradigma mundial de la democracia es representando en gran parte por monarquías *constitucionales* y *parlamentarias* occidentales -en muchos casos, con altos niveles de desafección política, pero provistas de sistemas de protección social y oportunidades de movilidad social- que no experimentan los niveles de conflictividad de América Latina, es inevitable preguntarse si acaso es la deficiencia institucional *genérica* de las democracias latinoamericanas la principal fuente explicativa de la acción colectiva en la región o alguna dimensión institucional más específica. No resulta del todo sencillo explicar que algunas sociedades latinoamericanas formalmente más democráticas que otras del primer mundo,¹⁶⁵ presenten mayores niveles de conflictividad que estas

¹⁶⁵ Democracias latinoamericanas que presentan, incluso en términos de su institucionalidad informal, niveles de corrupción tendentes hacia los del primer mundo, y en algunos casos

últimas. Comparativamente, saltan a la vista diversas dimensiones que contrastan entre el primer mundo y América Latina. Sin embargo, una de las más evidentes diferencias es la ausencia de un Estado del Bienestar (en cualquiera de sus modalidades) o de una participación activa de los Estados latinoamericanos en la economía. Resulta necesario, entonces, especificar si la conflictividad de la región es una crisis genérica de sus democracias o más concretamente una crisis del proyecto del Estado del Bienestar prometido, cada vez más explícitamente vetado para la región por los dictámenes del centro hegemónico, donde sí se permiten -en mayor o menor grado- gozar de sus beneficios.

Por cierto, el Estado del Bienestar y sus modelos son tipos ideales y en la actualidad podrían estar amenazados incluso en el primer mundo. Sin embargo, en aquellas regiones como América Latina, donde este modelo institucional ha sido históricamente una promesa y un proyecto inacabado, su cada vez más abierta denegación desataría altos niveles de conflicto. La insatisfacción de estas expectativas históricamente construidas, se expresa actualmente en la tensión permanente entre la desregulación neoliberal desde arriba y una población que aún entiende al Estado como el epicentro de la vida social. Posiblemente sería el estatismo lo que opera como gran *marco maestro* de las recientes movilizaciones latinoamericanas que exigen al Estado cumplir *su rol* protagónico. Por más radicales que hayan sido los ajustes estructurales neoliberales en la región, la población latinoamericana sigue viendo al Estado como un organismo con los medios para resolver los problemas (Latinobarómetro 2011). En definitiva, la ciudadanía sigue sin perder de mente al Estado del Bienestar como horizonte.

incluso más bajos (Corruption Perceptions Index 2011). Ciertamente, existen diversos argumentos para reconocer que así como la Modernidad no es monopolio de una región determinada, existiendo diversas modernidades, la Democracia tampoco lo sería. Por su parte, los mismos procesos de intercambio global posibilitan, por ejemplo, que los Estados y las sociedades civiles en América Latina alcancen altos niveles de digitalización. Actualmente resulta difícil incluso hablar de sociedades civiles latinoamericanas tecnológicamente atrasadas, pues desde la emergencia del EZLN hasta las recientes movilizaciones colombianas y chilenas, la ciudadanía ha demostrado globalmente un sofisticado y estratégico uso de los nuevos dispositivos comunicacionales.

Existen profundos déficits democráticos en la región, y precisamente la superación de estos permitiría a las sociedades decidir por sí mismas cómo se organizan y gobiernan. No obstante, este déficit no sería exclusivo de América Latina y habría que revisarlo o acotarlo como principal variable explicativa de la conflictividad. No es que las sociedades latinoamericanas necesiten profundizar sus democracias para parecerse al primer mundo, como supuesto referente democrático, sino que, como economías periféricas, requieren de democracias sólidas que actúen como escudo de soberanía frente a las arbitrariedades del capital transnacional. La deseable democratización en América Latina en este caso no sería la evolución imitativa del primer mundo hacia el desarrollo, como ha propuesto la teoría de la modernización, sino un mecanismo perentorio de resistencia y autodeterminación frente a la hegemonía del capital.

No basta con argumentar que el problema de América Latina es su déficit democrático (no le es exclusivo), sino más bien, habría que señalar que los desequilibrios económicos mundiales le exigirían en muchos casos llegar a ser tan o incluso más democrática que el primer mundo. La democratización político-institucional sería una condición necesaria y un primer paso para la autodeterminación (para poder decidir, por ejemplo, si se opta o no por un modelo de Estado del Bienestar). Sin embargo, en el marco de las arbitrariedades de la estructura económica mundial vigente, la democratización no sería un remedio inmediato para el conflicto, como lo demuestra, por ejemplo, la persistencia de las movilizaciones en la refundada democracia boliviana. Por tanto, las explicaciones respecto al conflicto social en América Latina debieran evitar los reduccionismos propios de la teoría de la modernización y sus reediciones neoinstitucionalistas en boga. Resulta importante también reconocer que, en las últimas décadas, la estructura económica mundial ha reforzado las desventajas de la periferia frente al centro hegemónico y la desigual distribución de los perjuicios y beneficios del mercado. Indagar en las complejas relaciones entre la política y sus actores locales y la estructura económica mundial, como en su momento lo hicieron Stavenhagen o Cardoso y Faletto, parece seguir siendo el principal desafío para entender la acción colectiva en América Latina.

Frente a las salvedades e interrogantes anteriormente planteadas, se invita al lector a introducirse con un espíritu crítico y un interés comparativo en los procesos sociopolíticos que los artículos describen y analizan a continuación. Como se anticipó en párrafos anteriores, este capítulo lo inaugura Massimo Modonesi ofreciendo una perspectiva amplia de lo acaecido en 2011 en América Latina. Su agudo análisis desalienta cualquier interpretación idílica de las movilizaciones, identificando sus límites y oportunidades. En un escenario tan diverso como el estudiado, logra identificar tendencias y rupturas, como también posibles vetas de análisis. El segundo artículo es el examen que Guiomar Rovira desarrolla de la situación actual del EZLN y el contexto mexicano. Con una exposición prolija es capaz de operacionalizar el fenómeno analizándolo pormenorizadamente. Más allá de los análisis militantes que abundan sobre el tema, la autora es capaz de identificar tanto las dimensiones donde el neo-zapatismo mantiene su vitalidad alcanzando importantes logros, como aquellas donde se ha debilitado y perdido protagonismo. Posteriormente, Sandra Vera expone en detalle los acontecimientos y el contexto histórico de las movilizaciones estudiantiles chilenas recientes. Junto con ofrecer un panorama clarificador de las primeras tesis expuestas por los analistas para el caso chileno, propone situar históricamente el fenómeno en un *continuum* de movilizaciones en el marco de la transición hacia la democracia y la superación de los enclaves autoritarios. Por su parte, Jairo López Pacheco ofrece un sistemático análisis de las movilizaciones por los derechos humanos en Colombia. Con una perspectiva histórica de los procesos de articulación organizativa y de las oportunidades políticas, es capaz de situar la agresiva relación entre el Estado y la sociedad civil más allá de la inmediatez espacial y temporal. Finalmente, el artículo de Melvy Quiroz y Sara Lourdes Sandoval sobre el conflicto intrahegemónico en Bolivia, revela la dificultad propia de aquellos gobiernos de “los desventajados frente al mercado”, para cumplir con sus programas y sus propios seguidores, en el marco de una estructura económica internacional adversa. El conflicto eco-territorial del TIPNIS entre el gobierno de Evo Morales y amplios sectores de la sociedad civil que lo catapultó al poder, evidencia cómo en un contexto estructural de capitalismo global, las tensiones sociales no se acaban inmediatamente gracias a las transformaciones institucionales, sino que más bien conformarían una nueva

estructura de oportunidades políticas, con nuevas posibilidades de resolución. Sociedades como la boliviana, donde la democracia se ha desarrollado al punto de refundarse soberanamente, evidencian que si en aquellas sociedades económicamente periféricas, las instituciones -por muy democráticas y pluralistas que sean- no logran proteger ágil y oportunamente a los ciudadanos de los embates del mercado, existirá un amplio potencial de conflictividad. La democratización institucional aparece como un paso necesario, pero no automático ni suficiente, frente a las arbitrariedades del mercado en aquellas economías situadas desfavorablemente en la estructura económica mundial.

El lector quedará expuesto a diversos fenómenos aparentemente desvinculados, pero se espera que las interrogantes y pistas expuestas en este capítulo lo estimulen en la elaboración de análisis integrados y de alto alcance histórico comparativo. Sin lugar a dudas, las movilizaciones de 2011 en América Latina no son hechos aislados en la historia de la región, pues si bien existe una gran dosis de innovación, el análisis socio-histórico permite identificar una alta recurrencia de repertorios, estructuras organizativas, recursos, marcos cognitivos, etc. Con esta compilación de textos se aspira, por un lado, a incentivar y difundir el interés en los conflictos latinoamericanos; y por otro, a contribuir al acervo de documentos e investigaciones ya existentes, sin los cuales estos textos mermarían su potencial analítico.